

Editorial

Cien días: el segundo gobierno de ARENA se desmorona

Los cien primeros días no son suficientes para evaluar lo que será un gobierno de cinco años, pero sí permiten establecer con bastante exactitud cuáles serán sus líneas fundamentales. Así como el discurso inaugural presenta el gran contexto donde se moverá el nuevo gobierno, los primeros cien días permiten establecer su curso. Si en ese tiempo, el nuevo gobierno no toma las riendas de la administración pública firmemente para cumplir con lo prometido, difícilmente lo hará más adelante.

El presidente Calderón prometió hacer de El Salvador un país de oportunidades con equidad, dado que, al asumir la presidencia encontró al país sumido en una pobreza estructural que condena fatalmente al que nace pobre a morir pobre (ver editorial, ECA, 1994, 547-548). Así, pues, la meta primera de su gobierno, según sus propias palabras, es romper con esa fatalidad para así poder establecer lo que llamó una paz social. Por lo tanto, al cabo de estos cien primeros días es necesario preguntarse si el gobierno se está moviendo en esta dirección.

El propósito de este editorial es tomar el pulso del nuevo gobierno en este período, teniendo en cuenta el planteamiento general que hizo el presidente Calderón al tomar posesión de la presidencia y la realidad del país.

1. El gobierno debe corregir su curso

Si efectivamente el gobierno quiere romper con la fatalidad del que nace pobre muere pobre, necesita llevar a cabo cambios estructurales radicales. Pretender que a base de política social lo conseguirá es un error craso. La política social podrá mitigar el hambre, pero no gene-

Mientras no existan medidas tendientes a corregir la concentración de la propiedad y de los ingresos se puede prometer mucho, pero se puede esperar muy poco.

rará empleo. Y lo que la población necesita es trabajar y elevar sus ingresos. Ciertamente, la salud y la educación son necesarias, pero no bastan cuando se muere de hambre. Mientras no existan medidas tendientes a corregir la concentración de la propiedad y de los ingresos se puede prometer mucho, pero se puede esperar muy poco.

Así, por ejemplo, la privatización, una medida modernizadora que el gobierno está dispuesto a llevar adelante y que causa protestas entre los trabajadores, debería tener tres destinatarios: en primer lugar, los empresarios capitalistas, quienes sólo deberían poder adquirir un porcentaje máximo de acuerdo al valor de la empresa o institución a privatizar y quienes debieran pagar al contado; en segundo lugar, los trabajadores de las empresas o instituciones, las cooperativas y las asociaciones de micro y pequeños empresarios vinculados a las empresas o instituciones a privatizar, quienes deberían participar con un porcentaje máximo, determinado de acuerdo al valor de cada empresa o institución, y pagar al crédito, el cual se amortizaría con los beneficios obtenidos sin tener que pagar intereses; y, finalmente, el Estado, que se reservaría la propiedad de lo no vendido de cada empresa o institución, pero los beneficios de esta porción serían destinados a salud y educación. Los fondos deberían ser utilizados para funcionamiento e inversión, quedando excluidos los salarios, los cuales siempre deberían ser cubiertos por el Estado. Si la privatización se hiciera en estos términos, algo cabría esperar para beneficio de los pobres.

Cien días después de haber tomado posesión del gobierno, el presidente Calderón presenta como logro económico el cumplimiento de las metas del programa monetario y financiero, pero en el área social sólo puede seguir ofreciendo promesas. Y es que los logros macroeconómicos no mejoran la calidad de vida de la mayoría de los salvadoreños. Más aún, el 48 por ciento de la población afirma que su situación económica ha empeorado desde junio, mientras que el 34.3 por ciento —la mayor parte clase media urbana— afirma que sigue igual. Sólo el 13.6 por ciento afirma que la situación ha mejorado con el nuevo gobierno (ver el artículo siguiente del Instituto Universitario de Opinión Pública).

A esta realidad se agrega que un poco más de la mitad de la población percibe cambios negativos desde que el nuevo gobierno tomó posesión. El aspecto negativo más mencionado (por la mitad de la población encuestada) es el alto costo de la vida, seguido del incremento de la delincuencia (27.4 por ciento) y del desempleo (6 por ciento). Las



expectativas tampoco son halagadoras para la mayoría de los salvadoreños. El 40.3 por ciento piensa que su situación económica seguirá igual con el nuevo gobierno, mientras que el 27.9 por ciento, más pesimista, piensa que empeorará. Sólo el 16.8 por ciento piensa que su situación mejorará con el gobierno actual. Todavía más claro, el 42.2 por ciento piensa que el gobierno sólo se preocupa por los más ricos. Por lo tanto, la mayoría de la población piensa que el presidente Calderón no cumplirá su promesa fundamental.

La población salvadoreña no se equivoca en su valoración y en cuanto a sus expectativas económico sociales. El gobierno actual trata de seguir los lineamientos establecidos por el gobierno anterior. Tanto los presuntos logros —una inflación decreciente, un tipo de cambio estable, una tasa de interés tendiendo a descender, una expansión del crédito, la aprobación de la ley para privatizar los ingenios, la presentación del anteproyecto de ley para la defensa de la libre competencia y el impulso al programa de modernización estatal— como el deterioro progresivo de la calidad de vida de los salvadoreños son resultado de la política económica del gobierno pasado. Por lo tanto, si la economía nacional sigue el curso marcado en estos primeros cien días, el resultado final, al cabo de los cinco años de este gobierno, será muy similar. Es decir, el presidente no podrá cumplir su promesa de romper el círculo fatal de la pobreza.

Pero incluso los resultados que el gobierno presenta como positivos en el campo macro económico son seriamente cuestionados por la realidad de los hechos, pues la disminución de la inflación es algo que sólo perciben los economistas gubernamentales, la tasa de interés ha disminuido en el caso de los ahorrantes, pero no en el de los inversionistas y la expansión del crédito está destinada al consumo y no a la producción.

Pese a ello, este gobierno tiene una oportunidad única para impulsar la reconversión productiva que difícilmente se volverá a repetir. Paradójicamente, pese a ser un gobierno de los ricos, las medidas económicas no están dirigidas a aprovechar esta oportunidad. Así, el control ejercido sobre el tipo de cambio no es coherente con la apertura comercial, puesto que ésta está llevando a la quiebra a la poca industria manufacturera nacional existente al abaratar las importaciones indiscriminadamente y, por el otro lado, está subsidiando el consumo suntuario, al abaratar las importaciones de esos bienes. Lo racional sería penalizar las importaciones suntuarias y favorecer las productivas. De este modo se aprovecharían las divisas actuales que posee el país por medio de las remesas, las donaciones y los préstamos —aparte de los precios del café de este año.

Cien días después de haber tomado posesión, el gobierno aún no ha podido organizarse para enfrentar los desafíos económico sociales del país. Si bien, por un lado, el curso económico social parece estar determinado por las políticas establecidas por el gobierno anterior; por el otro, dichas políticas no son aplicadas de manera consistente. Así, en el área económico social, pero no sólo en ella, el gobierno, en lugar de conducir o dirigir, ha estado reaccionando e improvisando para enfrentar la subida de los precios, la escasez de cereales y cemento, la sequía y el movimiento de los precios internacionales. Si este gobierno no está capacitado para responder a los desafíos económicos ordinarios que se presentan a cualquier gobierno, mucho menos lo estará para implementar los cambios necesarios para eliminar la pobreza.

En efecto, los planes gubernamentales de inversión social son desconocidos y aunque ya hay algunas propuestas —como la reforma del sistema educativo (ver ECA, 1994, 548-59)— en estos cien días no se ha percibido ninguna actividad orientada a ponerlas en práctica. Ni siquiera se han hecho del conocimiento de la opinión pública. Al igual que el primer día, el gobierno se mantiene repitiendo que concentrará sus esfuerzos en educación y salud, cuyo gasto considera, correctamente, como una inversión. Por eso extraña sobremedida que en su propia evaluación, el presidente Calderón haya omitido el diagnóstico del estado socio económico de los salvadoreños cien días después de haber tomado posesión. El diagnóstico es indispensable para medir el avance

de la promesa presidencial. Tampoco se refirió a la problemática laboral, excepto para señalar que las huelgas ocurridas en estos cien primeros días tenían carácter político y le habían hecho difícil el gobierno.

En este sentido, el llamado "sí a la vida", un grito de guerra contra la conferencia de población y desarrollo de Naciones Unidas, es demagógico. El gobierno actual dice defender la vida desde su concepción, pero no se preocupa de ella después del nacimiento. Al menos no se ocupa de la vida de todos por igual, sino que se dedica más a proteger con nuevos privilegios el bienestar de los más ricos. La mitad del préstamo millonario hecho por el Banco Interamericano de Desarrollo al gobierno salvadoreño que está destinado a inversión social, si es administrado eficientemente, aliviará los efectos inmediatos de la pobreza actual, pero no pondrá las bases para comenzar a erradicarla efectivamente. Dentro de tres años, cuando ya se haya gastado el dinero prestado, habrá más salvadoreños y, por lo tanto, más demanda de servicios sociales y más pobreza y, además, una deuda más que pagar y, por consiguiente, menos recursos nacionales para seguir aliviando las necesidades sociales de una población en expansión. Sin embargo, el gobierno habrá ganado tiempo para sobrevivir, postergando el problema de la pobreza.

Erradicar la pobreza del país es una tarea estructural de mediano y largo plazo. Por lo tanto, sería absurdo pedir resultados en los cien primeros días. Sin embargo, dado el compromiso presidencial y la envergadura de la empresa, en este período se deberían haber dado pasos importantes en esa dirección. Lo que se echa en falta no es la ausencia de resultados, sino la de las decisiones indispensables para cumplir la promesa hecha el 1 de junio. Así, pues, es inevitable advertir que el curso de la política económico social no está orientado hacia la erradicación de la pobreza.

Al igual que en el área económico social, los primeros cien días de gobierno de Calderón muestran que si cuenta con un plan político, éste tampoco determina la actividad gubernamental. En efecto, el gobierno se ha limitado a reaccionar de manera vacilante y contradictoria ante los acontecimientos políticos, demostrando, además, poca creatividad y acierto.

Este es el caso de la seguridad pública, donde el gobierno se ha visto forzado a actuar desbordado por la actividad criminal de grupos dirigidos por miembros de alta en la Fuerza Armada y en la Policía Nacional, por funcionarios del sistema judicial, por miembros del partido oficial y por algunos empresarios. Estos sectores se empeñan en mantener intacta la estructura tradicional del poder que, por definición, es violenta como único medio para mantener la concentración del poder

económico y, por consiguiente, del poder político. Estos grupos que actúan con protección oficial han desbordado al gobierno al concentrar sus ataques en el sector empresarial, poniendo en grave peligro las inversiones nacionales y extranjeras.

Ante esta amenaza, el gobierno ha debido tomar en serio la seguridad pública, pero de una forma poco consistente. Según el viceministro de seguridad pública, los escuadrones de la muerte no existen y serían producto de la especulación. Sin embargo, para el Ministro de la Defensa sí existen, pero no así el crimen organizado. El director de la Policía Nacional Civil, por el contrario, afirma la existencia del crimen organizado. Si los altos funcionarios vinculados a la seguridad pública carecen de claridad sobre los responsables de los crímenes políticos, del crimen organizado y de aterrorizamiento de la población, sus acciones, inevitablemente, serán dispersas e inefectivas. La descoordinación se extiende a la Policía Nacional Civil, en particular a sus órganos auxiliares, y al Órgano Judicial. La falta de coordinación entre el viceministro de seguridad pública, el director de la Policía Nacional, el Ministro de la Defensa, el sistema judicial y el Ministerio de Justicia evidencia la desorganización del gobierno y su incapacidad para enfrentar uno de los desafíos nacionales más importantes.

Otro caso donde las debilidades gubernamentales han sido puestas al descubierto es el de los centros penales. En los primeros cien días ha habido once motines con un saldo de 25 muertos y 64 heridos. Ciertamente, el problema de los penales es herencia del gobierno anterior. Al final de este último hubo seis motines. Pero el actual tampoco estaba preparado y no obstante haber una Dirección de Centros Penales, cuyo director ha permanecido en el cargo, sobreviviendo a los motines, no hay una política orientada a resolver estos graves problemas humanos, sociales y penales. Al final, el gobierno ha buscado la solución más fácil: reforzar la vigilancia de los penales con efectivos militares, redistribuir mejor la población penal y dar libertad a los presos sin garantía alguna de su rehabilitación, es decir, todo menos enfrentar realmente el problema.

Al no haber políticas gubernamentales claras, mucho menos puede haber concertación para afrontar los desafíos de la realidad -incluso los gremios de la empresa privada están confrontados entre sí por causa del libre comercio. De ahí la sensación negativa percibida universalmente en estos cien días de gobierno. En efecto, existe un curioso consenso

El gobierno se ha limitado a reaccionar de manera vacilante y contradictoria ante los acontecimientos políticos, demostrando, además, poca creatividad y acierto.

sobre la pasividad, la desorientación y la desorganización del gobierno actual. El segundo gobierno de ARENA se desgasta más rápido de lo normal, frustrando las expectativas de aquellos sectores que promovieron y apoyaron la candidatura de Calderón. Paradójicamente, el segundo gobierno de ARENA se caracteriza más por la ineficiencia e incapacidad propias de los neófitos que por la experiencia y eficiencia empresarial de los areneros. Sin duda, para muchos electores, la izquierda no era alternativa por su inexperiencia y falta de cuadros políticos; pero la realidad está demostrando que la derecha de ARENA tampoco lo es.

Ante este panorama, la Fuerza Armada se presenta a sí misma como la reserva salvadora del país que lo mismo dice estar preparada para colaborar en actividades de carácter social propias de los ministerios que para acudir en defensa de los salvadoreños que quedaron atrapados en las zonas fronterizas que el fallo de La Haya otorgó a Honduras. Por iniciativa propia y también por llamado de los cafetaleros, la Fuerza Armada está dispuesta a dar seguridad durante la recolección de la cosecha de café. Discreta, pero públicamente, está impartiendo cursos de varios meses de duración sobre seguridad nacional a civiles y militares, una materia que no le corresponde enseñar y para la cual, obviamente, tampoco está preparada. Al mismo tiempo que pide aumento del presupuesto de defensa —que habrá que restar del sector social—, se muestra dispuesta a explicar a los diputados ciertos gastos, pero guarda un sospechoso silencio acerca del control sobre la ejecución de dicho presupuesto.

La omnipresencia de la Fuerza Armada en la vida nacional es reforzada por sus actividades de



inteligencia de orden interno con el propósito de controlar a la población. El presidente de la república no ha prestado atención a estas actividades, de tal manera que no puede garantizar el uso que los militares hacen de esa información. Así, la desmilitarización parece ser más aparente que real.

Las elecciones dieron a ARENA el poder de dos de los tres órganos del Estado y la mayoría de las municipalidades, lo cual le permite ejercer un control casi absoluto sobre el país. Este control será aún mayor si el viceministerio de seguridad pública logra salir adelante con su plan de establecer juntas de vecinos y redes locales y regionales de información en todo el país, presuntamente para garantizar una seguridad que la policía no puede ofrecer en este momento. Las juntas de vecinos se convertirán en redes de información y de control sobre presuntos sospechosos, antisociales y opositores. La población se sentirá vigilada y atemorizada. Todo ello recuerda los criticados comités de la Nicaragua sandinista, cuyo fin era ser "los ojos y oídos de la revolución". Prescindiendo de los servicios que este nuevo aparato pueda prestar a la seguridad pública, es indudable que será de mucha utilidad política y electoral para el partido oficial.

Las garantías ofrecidas por el viceministerio de seguridad no son suficientes. Lo más probable es que las juntas y las redes sean integradas por antiguos miembros de ORDEN, de las defensas civiles, del servicio territorial y por activistas del partido oficial. De momento, no portarán armas; pero con el tiempo, podrán tenerlas. De todas maneras, las funciones atribuidas les dan un poder social y político demasiado importante. Es contradictorio que un viceministro de seguridad se proponga crear un aparato tan proclive a la inseguridad y a la violación de los derechos humanos, precisamente, para garantizar la seguridad.

Si el viceministro de seguridad quiere acercarse a la población y contar con su respaldo, ha tomado el camino equivocado, pues lo que está construyendo es un cuerpo de informantes muy poderoso para amedrentar a la población y muy útil para un gobierno que se desgasta tan rápidamente. La población colaborará y apoyará al viceministerio y a la policía cuando se convenza de que ambos cumplen y hacen cumplir las leyes sin necesidad de crear juntas de vigilantes.

Así, pues, la dirección que ha tomado el gobierno actual es equivocada en cuanto a cumplir las promesas presidenciales, pero es adecuada para consolidar los fundamentos del monopartidismo. Pese a ello, el futuro y las posibilidades de la derecha para seguir gobernando "democráticamente" no son evidentes, dadas las debilidades del gobierno actual y su incapacidad para satisfacer las expectativas creadas por él mismo.

El segundo gobierno de ARENA se caracteriza más por la ineficiencia e incapacidad propias de los neófitos que por la experiencia y eficiencia empresarial de los areneros.

2. Las alternativas para las mayorías

Ante la avalancha de críticas al cumplirse los cien primeros días del gobierno de Calderón, algunos han salido en su defensa argumentando que ese tiempo es muy breve para pedir resultados, por lo tanto, habría que esperar un poco más. Ya hemos señalado que no se trata de pedir resultados, sino de evaluar si se han adoptado las medidas necesarias para cumplir lo prometido. Tanto la clase política como la opinión pública coinciden en que esas medidas no se están adoptando, excepto —y con serias reservas— en el área de seguridad pública.

Otros alegan en defensa del gobierno que no se pueden esperar cambios dramáticos, dado que se trata del mismo partido, del mismo gabinete y del mismo plan de gobierno. En el gobierno actual hay mucho continuismo y, en esa medida, ciertamente, no se podrían ni deberían esperar cambios dramáticos. Pero tenemos derecho a esperar tales cambios y a que se rompa con el continuismo, puesto que esos cambios dramáticos los prometió el presidente Calderón el 1 de junio y, en la medida en que cumpla con ellos, deberá romper con el continuismo. El día de su toma de posesión, el nuevo presidente prometió romper con la fatalidad de la pobreza y a establecer los fundamentos de la paz social.

Para poder cumplir con estas promesas, de las cuales se derivan otras, todas ellas orientadas a mejorar la calidad de vida de los salvadoreños, es indispensable romper con la herencia del primer gobierno de ARENA, cuyas políticas económico sociales dejaron más pobres y mayor pobreza. Sin embargo, en sus cien primeros días en el poder, el gobierno actual no ha dado los pasos para comenzar a cumplir lo prometido con tanta solemnidad, sino que sigue transitando, con vacilación, por el mismo camino trillado por el gobierno anterior, por lo tanto, el resultado no puede ser otro que más pobres y mayor pobreza.

A primera vista pareciera que el presidente Calderón prometió demasiado, al igual que su antecesor quien, en su primer día como presidente, prometió gobernar para los más pobres de los pobres. Cinco años después comprobamos que, en realidad, gobernó para los más ricos de los ricos. Las promesas que hacen estos presidentes en su primer día de gobierno son efímeras y se las lleva el viento. Sus discursos de toma de posesión están dirigidos a la galería, puesto que no tienen ni la intención ni los recursos para cumplir.

Ahora bien, con todo lo demagógicas que puedan ser, las promesas de Calderón no dejan de tener su importancia. Cuando Cristiani asumió la presidencia, tres cosas se esperaban de su gobierno, que pusiera fin a la guerra, que disminuyera la pobreza y que erradicara la corrupción heredada de la democracia cristiana. Cristiani fue uno de los protagonistas del cese del enfrentamiento armado. Al firmar los acuerdos e intentar darles cumplimiento, consiguió una de las metas más importantes de su gobierno, opacando los incumplimientos. La corrupción y la pobreza quedaron relegadas para mejores tiempos. Así, pues, concluida la guerra, el reto económico social cobra prioridad, seguido del combate contra la corrupción y el crimen organizado. Este es el desafío que tiene el gobierno de Calderón.

El triunfo de ARENA en las últimas elecciones debe mucho al cese del enfrentamiento armado acordado por Cristiani. Hasta ahora, la presidencia de Calderón ha vivido bajo la sombra de esa herencia de Cristiani, pero no podrá seguirlo haciendo por mucho tiempo. La encuesta de opinión pública citada arriba muestra que el presidente no podrá diferir más las primeras medidas orientadas a erradicar la pobreza y a mejorar la calidad de vida de los salvadoreños. La imagen positiva de un presidente puede proyectarse exitosamente cuando es acompañada de algunos hechos comprobables. Si las condiciones de vida de los salvadoreños ni siquiera se mantienen, sino que empeoran, tal como lo muestran los datos económico sociales de los primeros cien días, la propaganda difícilmente podrá convencer a los salvadoreños de que el presidente Calderón cumple "al pie de la letra".

Si durante su gobierno, Calderón no sienta las bases para atender esta prioridad nacional y si, además, tampoco fortalece su gobierno, el futuro de ARENA y sus posibilidades para seguir gobernando este país se verán en aprietos, tanto que no debe descartarse la posibilidad de recurrir a la fuerza y al fraude —tal como lo hizo en el pasado el Partido de Conciliación Nacional. En el cumplimiento del compromiso adquirido por el gobierno con el pueblo salvadoreño el 1 de junio no sólo se juega el futuro de este último, sino también el futuro político de aquél. El resultado de los cien primeros días no arroja un saldo positivo, sino que presagia malos tiempos para el pueblo salvadoreño y para el partido en el poder. ARENA no es el partido de los salvadoreños pobres, aunque la mayoría haya votado por él.

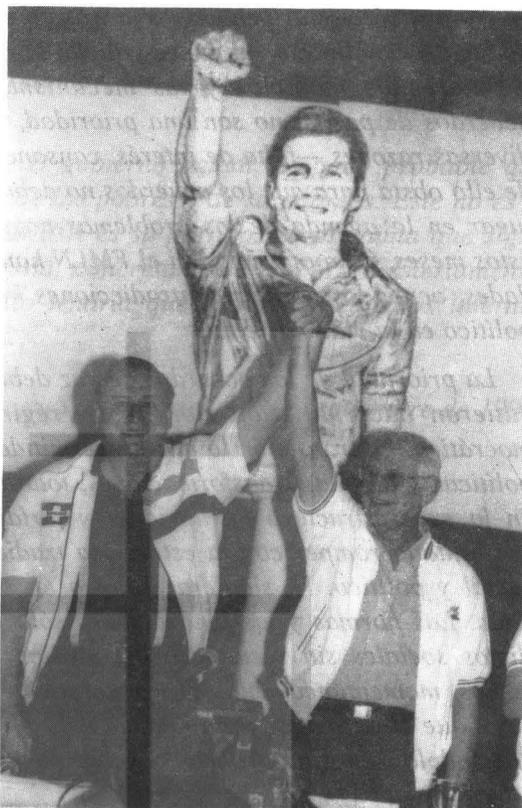
Los partidos políticos de la oposición, incluido el FMLN, han adolecido de la misma desorganización, indefinición y desorientación que el gobierno en estos cien primeros días. La oposición tampoco cuenta con un programa que la identifique, la aglutine y le marque el rumbo a seguir. Su logro más importante fue impedir que ARENA se apoderase de la

presidencia de la Corte Suprema de Justicia, pero eso no significa que la justicia haya sido bien servida con la elección de los nuevos magistrados.

La crisis institucional que padecen todos los partidos de la oposición los obliga a dedicar buena parte de sus energías a resolver sus divisiones y conflictos internos que ponen en entredicho su futuro inmediato. Las crisis más públicas son las de la democracia cristiana y del FMLN, pero no hay que olvidar los partidos que han desaparecido al no lograr el mínimo necesario para permanecer en la escena política en las elecciones pasadas ni los que surgirán como resulta-

do de los desprendimientos que se produzcan en los existentes. Esta crisis partidaria no es exclusiva de la oposición, el partido oficial adolece del mismo mal; la diferencia estriba en que la lucha por el poder dentro de este partido se manejó de forma más discreta hasta que reventó con las acusaciones de corrupción, lanzadas desde las mismas filas del partido gobernante.

En estos cien días, el FMLN tuvo en los acuerdos de paz un horizonte para contextualizar su razón de ser y su actividad, pero todo parece indicar que ha perdido dicho horizonte. Al considerarse cada vez más como partido político se ha ido acomodando quizás demasiado rápidamente a los esquemas tradicionales. En las elecciones pasadas apostó por la presidencia de la república no por sus bases ni por las mayorías populares. Alejado de aquéllas, el FMLN parece haber perdido la realidad a la que debe dar cuentas y de la que debe dar cuentas. Predomina el conformismo y el acomodo, como si desde el Estado no se pudiera hacer más. Que sea difícil promover y defender los intereses populares desde un Estado controlado en gran medida por el partido oficial es una cosa, pero otra cosa es que el FMLN no haya hecho todo lo que debiera en los últimos tres meses.



No obstante estar pendientes la transferencia de tierra, la reinserción de los desmovilizados, la nueva policía, la reforma del sistema judicial y los derechos humanos y los mecanismos para garantizarlos, los acuerdos de paz ya no son una prioridad, lo cual puede explicarse por diversas razones —falta de interés, cansancio, desánimo, etc. Pero nada de ello obsta para que los acuerdos no deban seguir ocupando el primer lugar en la agenda de los problemas nacionales. Lo cierto es que en estos meses, ni la oposición ni el FMLN han podido retomar esas prioridades, ocupados por sus contradicciones internas y por su nuevo papel político en la vida nacional.

La prioridad de los acuerdos de paz debe mantenerse porque no permitieron hacer la transición de un régimen autoritario a otro democrático. La transición lo que ha permitido es establecer nuevas reglas políticas y algunas transformaciones, todo lo importante que se quiera, en la superestructura institucional y jurídica del Estado, pero no ha posibilitado romper con la estructura tradicional del poder económico, social y político. Ni siquiera se toma en serio la participación ciudadana. Las normas y las innovaciones sólo posibilitan resolver los conflictos sociales sin recurrir a los medios extralegales o violentos —al menos, momentáneamente. Los acuerdos no han democratizado el país, sino que únicamente han hecho más flexible el régimen político, haciéndolo menos autoritario y excluyente.

Dado que la oposición no da muestras de estar interesada en las transformaciones políticas y sociales que el país necesita para el bien de las mayorías populares, ni parece tener capacidad para impulsarlas, es preciso que las distintas fuerzas sociales, económicamente empobrecidas y política y socialmente marginadas, asuman el papel que les corresponde como auténticos agentes de la historia. Es necesario que los campesinos y los obreros, los cooperativistas y los del sector informal, los repobladores y los desmovilizados, los marginados y los empleados públicos, los empresarios pequeños y medianos se organicen y así, de la mano de iglesias progresistas, de las universidades comprometidas, de los intelectuales honestos, de las organizaciones gubernamentales populares, etc., se pueda llegar a conformar una poderosa fuerza social nacional autónoma, capaz de impulsar los cambios estructurales necesarios para comenzar a enfrentar la injusticia estructural y exigir al gobierno que cumpla con su promesa de romper con la fatalidad de la pobreza.

Han sido, pues, cien días de incumplimiento por parte del gobierno y de desconcierto para la oposición. Si el gobierno no cambia su curso dramáticamente en los próximos meses, la pobreza seguirá predominando, la calidad de la vida de las mayorías se deteriorará más y la paz

social se alejará más aún. Por el bienestar de esas mayorías cada vez más desposeídas y por el bienestar de todos, la izquierda debe superar pronto su desconcierto y retomar los ideales fundamentales que se encuentran en sus orígenes.

Dado el curso que lleva el gobierno actual, es poco probable que vaya a ocuparse seriamente de los pobres y de su pobreza. Este no es el gobierno de los pobres ni ARENA es su partido. La pregunta que sigue abierta es si lo es la izquierda, concretamente el FMLN. Ciertamente, debiera serlo, pero para ello tendría que introducir cambios internos radicales y quizás dolorosos.

San Salvador, 15 de septiembre de 1994.

